



# EL UNIVERSITARIO

PORTAVOZ

DE LA

ASOCIACION DE ESTUDIANTES POPULARES UNIVERSITARIOS

AÑO 1

ENERO DE 1960

NUMERO 1



Varios directores de la ADEPU posan para las cámaras de EL UNIVERSITARIO. De izquierda a derecha Manuel González Pató, consejero; Carlos Eduardo Conde, editor de EL UNIVERSITARIO; Helen de Costas, consejera; Nathaniel Vélez, vocal; Enrique Vázquez, administrador de EL UNIVERSITARIO; y Wilfredo Colón, presidente.

## SE ORGANIZA LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES POPULARES UNIVERSITARIOS

Por: Benigno Santiago

Bajo la iniciativa de el señor Manuel González Pató, profesor de la Universidad Católica de Puerto Rico, figura de relieve insular en los círculos deportivos y miembro del Comité Municipal de Ponce, del Partido Popular Democrático, y la señora Helen de Costas, miembro del mencionado comité y estudiante de la Universidad, se citó para una reunión el pasado mes de noviembre del 1959 en el hotel "El Castillo", a un grupo de estudiantes universitarios.

El propósito de esta reunión fué formar la Asociación de Estudiantes Populares Universitarios (ADEPU). Asistieron alrededor de ciento cincuenta estudiantes universitarios. En espíritu de franca cooperación y camaradería el "coach", González Pató, luego de una breve introducción acerca del propósito de la reunión nos dictó una charla acerca de la historia y filosofía del

Partido Popular Democrático, sus logros, y sus metas y proyecciones.

Luego de hacer uso de la palabra un grupo de los universitarios se procedió a elegir la directiva que habrá de dirigir la ADEPU, en el 1960. Esta resultó como sigue:

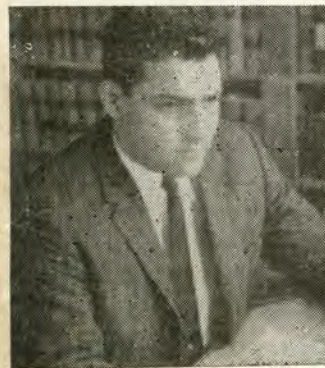
Presidente, Wilfredo Colón; Vicepresidente, Francisco Negrón; Secretaria, Isabel Castellar; Sub-secretario, Antonio Paz; Tesorero, Emilio Rodríguez; Vocales: Carlos Eduardo Conde, Rubén Gómez, Antonio Rodríguez Burgos, Nathaniel Vélez; Relaciones Públicas, Benigno Santiago.

Instalada la directiva y luego de discutirse varias mociones la asamblea llegó a los siguientes acuerdos:

1. Llevar a cabo una campaña educativa para que la juventud puertorriqueña acuda a inscribirse (Pasa a la pág. 7 col. 4)

## Puerto Rico; Territory or State?

Por el Licenciado Rafael Hernández Colón



Lcdo. Rafael Hernández Colón

### Nota del Editor

El licenciado Hernández Colón es graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de P. R., clase del 1959. Obtuvo el mejor promedio de su clase y en la última reválida para aspirantes al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico fué la nota más alta. El licenciado Hernández Colón tiene 23 años de edad. Es hijo del licenciado Rafael Hernández Matos, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esta tesis será publicada también en la Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Debido a que dicha revista desafortunadamente no es de fácil acceso a los estudiantes universitarios de Puerto Rico a excepción de los estudiantes del Colegio de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, esta revista comienza en esta primera edición a publicar parte de esta tesis hasta completarla en ediciones subsiguientes. Por limitación de espacio hemos eliminado con permiso del autor las referencias y los "footnotes" de ésta. Esta revista gustosamente ofrecerá a quien lo solicite por carta estas referencias y "footnotes". La tesis fue escrita en inglés ya que el autor uso principalmente referencias de textos en este idioma.

Para todos los universitarios que se interesan por los problemas de

Puerto Rico consideramos de capital importancia la lectura de esta tesis ya que el autor prueba y citamos; "Que desde el punto de vista jurídico, el Estado Libre Asociado, es una entidad política soberana, lo que es decir; independiente en su esfera de acción. Y además que el Congreso de los Estados Unidos, carece de facultades para intervenir con el Gobierno de Puerto Rico, dentro de esa esfera particular reservada al Estado Libre Asociado" Al publicar esta tesis del licenciado Hernández Colón EL UNIVERSITARIO hace su humilde aportación a la gran Obra de nuestro partido Popular en el gobierno y a la Suprema Creación del Estado Libre Asociado.

### INTRODUCTION

Since the Commonwealth of Puerto Rico was established in 1952 several cases 1 have arisen wherein the question of the nature of Commonwealth status has been raised. The opinions contain a considerable amount of dicta on the subject, but since no case has reached the United State Supreme Court the question remains very much open and alive. The extent of applicability of Federal laws to Puerto Rico is the issue which most frequently brings the status question to the fore. 2 It generally arises with Congressional legislation passed before 1952. Such statutes were made applicable to interstate commerce and with plenary effect within the territories. There is no doubt that since prior to 1952 Puerto Rico was a territory; all transactions whether purely local or in interstate commerce were covered by applicable Congressional legislation. Since local transactions within the states of the union are said to be beyond the reach of Congress, the question after 1952 is wether the establishment of the Common-

(Continúa en la pág. 3)



## EDITORIAL

## ¡JALDA ARRIBA!

Utilizando el grito de campaña del Partido Popular Democrático, **EL UNIVERSITARIO** se inicia como revista para el estudiantado universitario de Puerto Rico.

Hemos tenido tropiezos iniciales de índole económica principalmente pero nuestra lucha debe tener sabor de sacrificio. Además, podemos decir a ciencia cierta que el interés común que une a los que trabajamos tanto en la redacción como en la administración de esta revista mensual es incentivo de sobra para seguir adelante. Cooperar desde todos los ángulos con la obra del Partido Popular Democrático. Esto a nuestro juicio es obligación y deber moral de los universitarios y de la juventud puertorriqueña. Precisamente porque nuestros padres y abuelos en su inmensa mayoría fueron los que iniciaron la gran marcha triunfal y arrolladora de este partido y que nuestros sentidos palpan a plenitud. La revolución social y económica que inició el Partido Popular Democrático en el 1940, no podrá ser destruída por la oposición, principalmente, el Partido Estadista Republicano.

Es nuestro deber ineludible atacar limpiamente esa oposición. Y la atacaremos. La atacaremos no con demagogia o con prácticas que dejen ver falta de ética periodística. La atacaremos con hechos, con pruebas bien fundadas.

Esta revista esta en la mejor disposición de servir los intereses de los universitarios de Puerto Rico, los universitarios del Estado Libre Asociado. Repetimos; ¡¡¡JALDA ARRIBA!!!

## EL UNIVERSITARIO

Publicación mensual Auspiciada  
por la  
Asociación de Estudiantes Populares Universitarios

## JUNTA DE REDACCION

Carlos Eduardo Conde	Editor
Enrique Vázquez Jr.	Administrador
Rafael Alfonso Jr.	Director de Circulación
Circulación Gratis	3,000 ejemplares
	Circulación Gratis

Impreso en los Talleres de  
**PUERTO RICO EVANGELICO**  
Comercio 89 — Ponce, P. R.

## MENSAJE DEL PRESIDENTE



Wilfredo Colón

Estimados Compañeros Universitarios:

En ocasión de publicar nuestra primera edición de **EL UNIVERSITARIO**, quiero aprovechar tan propicia oportunidad para recordar les el día de las inscripciones como nuevos votantes. Tal vez se habrán enterado por una proclama emitida por nuestro Honorable Gobernador, Don Luis Muñoz Marín, que el día 30 de enero, se inscribirán todos los electores del sexo femenino, y el día 31 de enero, se inscribirán todos los electores del sexo masculino. ¿Qué importancia tiene el inscribirse? Una de las más fundamentales es que por medio de la inscripción el ciudadano completa su condición de tal. Que la inscripción será el anticipo de nuestro triunfo electoral del 1960, y no debemos descuidar.

Indudablemente se habrán dado cuenta de la vital importancia de las próximas elecciones, pues los intereses que nuestro pueblo derrotó en el 1940, mediante nuestro glorioso partido Popular Democrático, están desarrollando una alborotosa campaña para recobrar el poder. Te habrás enterado tal vez por algún buen puertorriqueño o por las conferencias llevadas a cabo por la Comisión de Orientación Política, como era Puerto Rico cuando gobernaban aquellos intereses. El único objetivo que tienen los republicanos es de volver al poder. Pero el gran obstáculo que se pone en su camino es el Partido Popular Democrático.

Conocen la obra realizada por nuestro partido y también conocen que el pueblo de Puerto Rico en su vasta mayoría la apoya depositando sus votos a favor de este para que se continúe. Hay quienes quisieran hacer polvo del pasado y nosotros pretendemos cargarlo intacto sin caer en el error de pensar que el pasado es sinónimo del futuro pero si convencidos que ese pasado es garantía del futuro. Las

cosas que hemos pensado como buenas hay que hacerlas aunque las crean malas los que no han sabido hacerlas. Y les exhorto compañeros universitarios a que asuman la posición de buen popular en el pueblo donde residen y orienten a todos los nuevos votantes populares para que los días designados por medio de la proclama emitida por nuestro Gobernador que les hago alusión en este artículo concurren todos a sus comités a inscribirse.

Acuerdense también que para que un joven pueda votar necesita inscribirse; y para que ese joven pueda inscribirse necesita tu cooperación; así que, ayúdalo para que por medio de la inscripción ese ciudadano complete su condición de tal. No debemos permitir que un solo joven Popular pierda su voto por no haberse inscrito. También los exhorto a que cooperen con los comités municipales pues estos están a cargo de dirigir y llevar a cabo los trabajos de inscripción. Nuestro presidente Don Luis Muñoz Marín, espera que todos nosotros estimulemos y ayudemos a inscribir a todos nuestros compañeros que tengan derecho a votar en el 1960. Así que; **ADELANTE Y EXITO.**

Afectuosamente,  
Wilfredo Colón Pagán  
Presidente Asociación de Estudiantes Populares Universitarios.

El asistir a universidad o a colegio es un proceso por si mismo de madurez. La madurez alcanzada por el estudiante promedio tiene por lo general relación con; (a) relaciones entre la facultad y el estudiantado (b) cordialidad (c) integridad básica (d) altos cánones intelectuales. De existir esto la personalidad del estudiante tiende a robustecerse. Si falta ese apoyo y el estudiante es dejado a sus propios medios, su desarrollo emocional es en su mayor parte una cosa del azar.

## ¡RECUERDA UNIVERSITARIO!

El día 30 de enero se inscribirán todos los electores del sexo femenino y el 31 los del sexo masculino.

¡INSCRIBETE!

CUMPLE CON TU DEBER DE

CIUDADANO



## Puerto Rico Territory..... (Viene de la pág. 1 col. 4)

wealth requires that laws which were applicable to Puerto Rico with plenary effect should now apply only to transactions which affect interstate commerce. Or, to put it in another way, whether Puerto Rico is to be considered a state for the purpose of applicability of federal laws.

Even though the nature of Commonwealth status has been the rationale of some decisions, the concrete issue of whether this status in and of itself prevents the application of federal laws to purely local transactions within Puerto Rico is carefully avoided. Thus, the Federal Firearms Act, 3 was held inapplicable to an offense locally committed 4 because the autonomous nature of the Commonwealth status was such that if Congress had foreseen its establishment when it passed the Firearms Act it would have limited the latter's application to interstate offenses. The label territory in the act was interpreted to exclude Puerto Rico. Congressional intent in the establishment of the Commonwealth was the outspoken premise of this opinion.

The *Trigo* case, 5 a more recent opinion, relied heavily on the above case in denying local application to the Federal Alcohol Administration Act. 6 But, in concluding that this statute applied only to transactions affecting interstate commerce the District Court was vexed by a problem not present in the *Figueroa* case: The label territory was expressly defined in the statute to include Puerto Rico. The short answer to this was said by the Court to lie in Section 6 of Public Law 600 which initiated the establishment of the Commonwealth. This section provided that "All laws or parts of laws inconsistent with this act are hereby repealed."

From a political and sociological point of view there is no doubt as to the soundness of these decisions. Autonomy over local matters has such vast psychological implications to the people of Puerto Rico that its value overrides the convenience of federal regulation of these matters. The legal value of the opinions rests upon a judicial determination of an elusive Congressional intent. Thus the ratio decidendi of the question whether a certain law applies locally or not is the intention of Congress as to the extent of its application. The opinions do not answer the most important question from the status point of view, namely: whether Congress could apply the statute locally if it so intended.

By interpreting Congressional intention as against local application, the courts avoid the more difficult problem.

The most forthright decision in this respect was rendered by the Labor Relations Board of Puerto Rico in the *Caribe Hilton* case. The Board held that: "The application of the Taft-Hartley Act to purely internal or local matters in our Commonwealth is in open conflict with the full measure of self-government recognized for Puerto Rico by virtue of its new status". 7

A decision by the United States Supreme Court to the effect that Congress in bringing about the establishment of the Commonwealth has abdicated its power over local matters would, of course, decide the heart of the status question. It would mean that a locally autonomous political entity has been created and that a substantial legal change has occurred in the form of government that we enjoy. Courts are naturally hesitant to resolve such an issue. Perhaps the question will some day be set aside as political and we shall never have an answer. Yet, I can not help but feeling that such a decision would be another great step from the position which more than one hundred years ago John Marshall carved out for the court.

Constitutional law is born of politics. It harnesses political power; it allocates it among the different organs of government. The Supreme Court is entrusted with the duty to expound the Constitution, and so it must circumscribe the exercise of political power in this country. True, that it must follow the demands of the times in tracing the line, but it must never abdicate this function until we are ready to abandon the law as an instrument of control. The status question which is nothing more than the legal determination of the power which Congress and the Commonwealth government respectively over Puerto Rico is, to my mind, a proper subject of constitutional law for determination by the Supreme Court.

The political life of Puerto Rico earnestly demands such a determination. Five centuries of civilization do not pass in vain. Puerto Rico is today a very self-conscious cultural community. It has a people with a homogeneous race, language, and history. It has its own way of life, its own culture, its own personality. These factors breed a necessity as well as a desire for self-government. A government that responds to the

dictates of its own people. The Commonwealth is such a local government. At this stage of the life of our people this has been accepted as the best form of government as against statehood or independence. Nevertheless, it is attacked as a sham by those who favor the other alternatives. They argue that it has no legal basis, that it is colonialism in disguise. The people of Puerto Rico are the losers in this battle. They lose because much political energy that should be directed towards a constant betterment of government is wasted arguing this question back and forth. And again, they lose because in the fray, confusion as to the nature of the status is the outcome. "Part of the reality of freedom is feeling free." 8 And, within a realm of law there is no other freedom such as that freedom which lies in the feeling that one's interest, right, or belief is protected by law. The uncertainty with which the legal nature of the status has been clouded robs Puerto Rico of this privilege.

Should a case such as *Trigo* reach the Supreme Court of the United States, the Court should not avoid its opportunity to answer the status question. The type of issue which that case raises, if squarely met, is determinative of that question. Statutes such as the Federal Firearms Act or the Alcohol Administration Act are not applied locally within the states of the Union because there is something which prevents the reach of Congress from extending that far. This reach is a very long one indeed, but it still has its limits. The reason for these limits constitutes the distinction between states and territories since in the case of the latter plenary application is constitutionally sanctioned.

A careful study of the political entities we term states and territories gives the answer to this question. The following pages are such a study. Some, but not enough, attention has been devoted to the historical facts in American life which in moulding the law have shaped the constitutional theory which gives life to these entities. Some of the theory presented is not fortunate enough to have Supreme Court Cases backing it. This is so, not because the precedents are adverse, but because there are none. Other sources then, have been resorted to in order to weave the theory I submit. The only value of this paper when discussing such unexplored areas of Constitutional Law lies in the

strength of the arguments presented. Even with these difficulties, through this approach a satisfying and convincing answer can be obtained for the status question. But, it should be kept in mind that this work seeks only a legal answer. It does not pretend to assess the merits of Commonwealth status, nor are any of its defects pointed out, and these are many. The problem has been stripped as much as possible to its legal particulars. With this in mind let us revert to the formation of what is now the United States of America to begin our inquiry into the nature of states and territories.

## I

The Articles of Confederation knew not the term territory as a political status. The only use of the word in that document is when referring to the tract of land or geographical containment of the particular states.

Regular use, however, is made of the term state. A reading of the articles is enough for an adequate notion as to the nature of "states". Article 2 gives notice of their sovereignty, freedom, and independence. 9 Other references in the Articles indirectly testify that they are political communities organized under a system of government. 10

This contrast between the appearance of one of the terms under analysis, and the absence of the other is of some importance, since it raises the question of the power of the Congress under the Articles to acquire or legislate for the then unoccupied western land.

Though the existence of such power was never settled in theory, 11 the Ordinance of 1785 and the Northwest Ordinance of 1787 show that the power was exercised in fact. Before the passing of these ordinances the Congress of the Confederation had been the converging point of different interests arising from the existence of unoccupied western land. Maryland refused to ratify the Articles until all western claims had been surrendered to the central government. 12 Virginia would not cede her land claims unless Congress declared void all land company purchases in that region. Land speculators of Pennsylvania and Maryland claiming land both north and south of the Ohio, evolved constitutional theories to beseech Congress to exercise its sovereign powers and take the land away from Virginia. 13

The speculators who at times were members of Congress, rallied



to whatever theory might best support their claims of land. Consistency was no limitation, and we find the same men at a time urging Congress to take over the land by exercising its sovereignty and at the same time trying to force an unrestricted cession from Virginia. 14 Merrill Jensen states that: "Americans fought with one another as to whether the central government or the individual states should control the lands claimed by them on the basis of their ancient charters. The reason for the conflict was primarily simple although its ramifications were endless and clouded by constitutional and legal theories which have lead later generations to lose sight of the realities upon which eighteenth century men kept a steady eye". 15

The Land Ordinance of 1785 which was an outgrowth of the Ordinance of April 23, 1784 provided for temporary government of the northwestern territory. Thomas Jefferson was the Chairman of the committee entrusted by the Continental Congress with the drafting of the instrument. As a result the document was endowed with the finest democratic principles. Thus, one of its sections states that Congress shall authorize the free males of full age of the different "states" into which the northwest territory was subdivided: "to meet together for the purposes of establishing a temporary government, to adopt the constitution and laws of any one of the original states, so that such laws nevertheless shall be subject to alteration by their ordinary legislature; and to erect, subject to a like alteration, counties or townships for the election of members of their legislature". 16

This self-government program was promptly substituted by a rigid system of Congressional control provided in the Northwest Ordinance of 1787. The change was due partly to a fear of the lawlessness of Westernness, partly to fears of Indian war but mostly to the pressure of new speculative interests which swept down upon the Continental Congress. The Ohio Company, a speculative concern, asked for a virtual suspension of the Land Ordinance of 1785. To further land speculation guarantee of property rights and rigid political control was essential. The Northwest Ordinance of 1787 provided it. 17

The political communities organized either under the Ordinance of 1785 or under that of 1787 were not termed territories. Both ordinances refer to them as "states".

18 No doubt that the political

community which the ordinances termed "states" were the counterpart of what is today termed territory, and it is perfectly logical to say that the name does not alter the nature of the thing. Yet, the terminology of the ordinances is significant for ascertaining the meaning of the terms within the framework of the present Constitution.

The framers of the Constitution did not employ the term territory as designating a political status under the American Constitutional system. 19 The term as used in Article IV, sec. 3 20 means a tract of land; it does not refer to a political status.

Article IV sec. 3 was not in the original draft of the Constitution as returned by the Committee of Detail on August 6, 1787.

On Saturday, August 18, the Journal reports: 21 "The following additional powers proposed to be vested in the Legislature of the United States having been submitted to the consideration of the Convention. It was moved and seconded to refer them to the Committee to whom the proceeding of the Convention were referred. The propositions are as follows: To dispose of the unappropriated lands of the United States. To institute temporary government for new state arising thereon". 22

Madison reports the return of this proposition to the Convention as proposed by Governor Morris: "The legislature shall have power to dispose of and make all needful rules and regulations respecting the territory or other property belonging to the United States; and nothing in this constitution contained, shall be so construed as to prejudice any claims either of the U. S. or any particular state." 23

The Committee of Style altered only three words of the above presentation: "Congress" was substituted for "Legislature", and "contained" plus "either" were dropped. 24 With these minor changes the above passed to be the second paragraph of Article IV section 3 as we know it today.

Nowhere in the development of this clause do we see a political status in creation. Power was being given to Congress, the result of the exercise of this power—actual creation of a government upon a tract of land belonging to the United States—was not given a name. That was to come later, once Congress had exercised the power.

Some understanding of framers' conception of the territorial power is derived from a letter by Governor Morris to Henry Livingston in which he points out that: "I always thought that, when we

should acquire Canada and Louisiana it would be proper to govern them as provinces, and allow them no voice in our councils. In wording the third section of the fourth article, I went as far as circumstances would permit to establish the exclusion. Candor obliges me to add my belief, that had it been more pointedly expressed, a strong opposition would have been made." 25

In addition to the use of the term provinces for what today would be termed a territory, this letter is significant because it suggests a limitation on the grant of power to Congress under Article four, section 3. Territory, the letter seems to suggest in a subtle way, may be governed temporarily by Congress, but once the territory becomes a body politic, admission to the Union, as state is mandatory. Though Morris did not personally favored this, he apparently believed it to be the feeling of the Convention.

Furthermore, it is significant that the original phrasing of the power granted to Congress was to institute temporary governments on these lands. The clause providing for admission of new states to the union was put together with the so called territorial clause in section 3 of Article IV, by no more coincidence. This joinder represents a policy. The power may well have been granted in Article I, section 8. 26

The fact that it was not, indicates that the reason it was placed in Article IV, section 3, was an interest that such power would be exercised to effectuate the preceding grant in the same section. Statehood is not only a logical, but a necessary next step to the so called territorial status. 27

This affords a reasoned answer as to why there are virtually no limits to Congressional power under the territorial clause. Congress was given a free hand because the unruly state of the West required absolute control, because land speculators urged the Congress to rule with a heavy hand for the protection of their interests; but this grant was temporary. As soon as the settlers in the West matured into body politics they were to be turned into states.

The problems of the West at the time the Constitution was framed and their paramount importance determined to a considerable extent the granting of the territorial power. The Founding Fathers were not know by a disposition to make unrestrained grants of authority. Only where the situation strictly demanded it, as in the Western case, can we hold them to

have entertained such an intent.

As noted, the power of the Confederation over the Western territory was a subject of dispute. In Federalist Number 38 Madison points out that the Northwest Ordinances were passed "without the least color of constitutional authority," and in Number 43 he states that Article IV section 3 is directed to supply the lack of power of the Confederate Congress in this respect. After the Constitution went into effect the First Congress repassed the Northwest Ordinances. 28

In view of the nature of the Union which the framers were creating, the necessity of expressly granting this power to the federal government may be seriously questioned. The United States was not to be the loose unworkable confederation which had existed previously. Under the Article of Confederation, wherein the states retained their sovereignty and independence a reasonable doubt could be entertained as to the power of the Congress to govern the Western territory. But, under the Constitution a federal nation was born. The states unreservedly abdicated all power over foreign affairs. The main of internal political power was formally placed in the federal government. In view of this, and of the corresponding restriction of the power of the states under the constitutional plan, the express grant of the territorial power under Article IV, section 3, may be deemed superfluous. Its inclusion may be explained, however, by the desire to settle once and for all the power of Congress in this respect.

Turning now, to the definition of states it will be noted that the Constitution does not define what the states are. The instrument, of course, was mainly concerned with allocating power and establishing a federal government. States governments were already in existence, and though their powers are sharply curtailed, they remained sovereign, political communities occupying well defined sections of the North American continent. The most important factor to note at this point, about them is that they did not owe their existence to the Constitution. The states were created by their own people, and it was their consent embodied in their own particular constitutions that gave them the status of states. These entities the constitution bound into a Federal Union.

The foregoing has attempted to be a summary of the principles governing the institutions of states and territories at the time the

(Continued on page 6)



## JUNTA DE REDACCION HONORARIA

Lcdo. Ernesto Ramos Antonini  
 Lcdo. Leopoldo Bonilla Vélez  
 Enrique Vázquez Reyes  
 Lcdo. Pedro Muñiz Ramos  
 Dr. Jaime Costas Durieux

Francisco Girón  
 Lcdo. José N. Dapena  
 Generoso Mourinho  
 Juan Luis Boscio  
 José A. Rovira

Rafael Pou  
 Ismaro Torruella  
 Andrés Grillasca  
 Ramón Enrique Bauzá  
 Liberto Ramos

Luiz Vázquez  
 Helvetia Nicole  
 Remberto Fagot  
 Lcdo. Pedro J. Pizá  
 Frank Vilariño



Juan M. Mercader  
 M. A. Zamora  
 Humberto L. Nieva  
 Lcdo. José Guillermo Vivas  
 Alejandro Bonilla

Gracias a la desinteresada y generosa cooperación de estas personas esta primera edición de EL UNIVERSITARIO ha sido publicada. A nombre de la Asociación de Estudiantes Populares Universitarios, mil gracias.

Enrique Vázquez Jr.  
 Administrador

### ESTUDIANTE UNIVERSITARIO:

Tres razones para unirse a nuestro grupo:

1. La revolución social y económica que inició el Partido Popular Democrático veinte años atrás y que tu no conoces plenamente, esta siendo adulterada y calumniada por la oposición. Es necesario que te

orientes.

2. Son los mismos de la década del 1930-40. Se cambian el nombre pero —SON LOS MISMOS—
3. No podemos permitir que el pulpo económico republicano nos ahogue nuevamente. Para botón, con UNA muestra basta.

Recorta este cupón y envíalo a la siguiente dirección:

ADEPU  
 C/O Isabel Castellar — Secretaria  
 Martín Corchado No. 24  
 Ponce, Puerto Rico

También lo puedes entregar personalmente a cualquier miembro de la directiva.

Favor de inscribirme en la ADEPU

Nombre \_\_\_\_\_  
 Hospedaje \_\_\_\_\_  
 Residencia \_\_\_\_\_  
 Estudiante de \_\_\_\_\_  
                   B. B. A.,        B. A., etc.  
 Año que estudio        1        2        3        4  
 Universidad \_\_\_\_\_



Puerto Rico Territory. . . . . (Viene de la pág. 4 col. 4)

Constitution was written. However, as has often been pointed out "institutions undergo transmutations of function as well as to form (and) the evidence of institutional genesis by no means concludes the exodus". 29 We must then determine what impact one hundred and seventy years have had on the terms under analysis.

## II

A study of the historical development of the territorial doctrine would prove of from a constitutional, historical, or philosophical perspective. Such work, however, has been often undertaken elsewhere, 30 and we could hardly add to what has already been said. A review of Supreme Court cases dealing with territories when put in their historical setting raises some doubts as to the value of *stare decisis* in this field of the law. In each decision the impact of the times is telling. The early cases, 31 most of them decided by Marshall, laid the foundation of a body of doctrine which grew with the country and with the problems of American society. The *Dred Scott* case, 32 which contains the most extensive treatment of the matter, is tainted by the cause of slavery. The Insular cases 33 breathe the imperialism of the late nineteenth hundreds. Common sense requires that the cases which have developed the territorial doctrine, should not be considered in the same manner as precedent is in other fields of the law such as property or contracts. The doctrine which the Court has developed concerning territories, will be subsequently stated. It should be appraised in the light of the foregoing statements to ascertain its present value. In starting the doctrine we will be necessarily defining the word territory. For territory is a word which draws its meaning from a particular act, which is an exercise of power by the Congress. That is, **territory, when signifies a political status, is but a conceptualization of the result of the exercise of the power to erect temporary governments upon land belonging to the United States.**

There has been some discussion as to the source of this power, 34 though its existence has never been in dispute. Three sources, not mutually exclusive, have been said to grant it: (1) the territorial clause in Article IV, section 3 of the Constitution; (2) the implied power to govern derived from the right to acquire territory 36 (a

corollary of this would be the right derived from the treaty of cession); (3) the inherent power as a sovereign nation.

That the Court has pointed to these three sources for the territorial power is of great importance for an analysis of the matter. All too often the true nature of the territorial power is mistaken by erroneously conceiving it as similar to such powers as the interstate or bankruptcy powers. Those are delegated powers. Congress has them because they were expressly put in the Constitution. True, that the territorial power was put in Article IV, section 3. It was done on account of the reasons we have previously pointed out. But, had it not been granted, there is no doubt that it would have been recognized as an inherent power in Congress. The fact that the Court has since early times recognized that Article IV, section 3, is not the only source of the power bears out this point. Other constitutional powers are not of this nature. If they had not been granted to Congress they would have remained with the states according to the 10th amendment. No legal gymnastics would have availed to transfer them to Congress.

Why the different nature of the territorial power? Simply, because the federal government was entirely entrusted with the international affairs of the Union. These powers were completely abdicated by the states. As a member nation of the international community the United States represented by the federal government must have the power to govern territory. Otherwise it would be severely limited in its international relations and transactions. Thus, the reason why this power must be considered inherent in the federal government and consequently different from the delegated powers.

Not once in history has the Supreme Court denied that the United States had the power to acquire and govern new territory. When that power is exercised by instituting a local government the resulting entity is termed a territory. This word represents the combined idea of people, land and government. A territory is then a political subdivision of the outlying dominion of the United States. 38

Characteristic of this political subdivision is that its powers are conferred by Congress, not by the

people. 39 Therefore, the government is dependent upon Congress to whom it owes its existence. 40 The people in the territory do not constitute a sovereign power, for they are under federal sovereignty and tutelage. They have not formed a state.

The power of Congress over this creature 41 it has brought into being is absolute. 42 It can repeal the organic act which created the territory and leave no government at all. It can legislate directly for the people in the territory. The acts of the territorial legislature are voidable at Congressional whim. The powers of the territory are enclosed in the organic act to which it owes its existence. The government nor the people of the territory can neither add nor detract from these powers. The only one who can do so is the Congress.

These are, in brief, the significant characteristics of territorial status. Other distinctions may be drawn if we differentiate between incorporated and unincorporated territories, but for present purposes all that needs to be said is that to the latter only the fundamental provisions of the Constitution apply. The doctrine here expounded applies with equal force to both types of territories.

A realistic analysis of any theory of Constitutional Law may not stop here. In its decision of cases the central responsibility of the Supreme Court is that of adapting constitutional theory to an ever-changing social, economic, and political pattern. Precedents satisfactory for the time of their establishment may seem incongruous as guides for later periods. 43 The function of the student of constitutional theory is thus not limited to restating the law, but he must be something of a soothsayer as well. 44

On the whole, I believe that the Court is still satisfied with the old guide posts in this field of constitutional law. The *Stainback* 45 and *Granville-Smith* cases, decided in 1949 and 1955 respectively, cling to the old concepts and ideas. However, congressional government of dependent territory has only a limited desirability in the mid-twentieth century. Useful as it was when the country was expanding to its manifest destiny, it does not partake of the prevailing philosophy for governing dependent territory. The guiding thread in

the modern trend is the principle that all peoples are entitled to a government of their own choosing and determination. It has now become a reality that the United States is sovereign over territories which are desirous of remaining attached to the United States, but are unwilling or precluded from membership in the Union. The case of Puerto Rico has been the first attempt towards a status consistent with self-government and with association with the United States. The Virgin Islands now seek a similar form of government. The Supreme Court has ahead the task of contrasting and adapting the territorial doctrine to the new relationships that are blossoming between the territories and the nation.

## III

Distinguishing "territory" and "state" 47 may be impossible if only the entity is considered. Both words represent an idea formed by a combination of people, land, and government. Both are political subdivisions of the United States. The Constitution, predicated upon the existence of the states, does not define them. Nor does it make any attempt to establish any requirements that these political subdivisions ought to have, to be considered states. Therefore, to determine the ontological properties of this entity, we must look beyond the Constitution to the thirteen original states which created the Union.

These thirteen states were sovereign, free, and, independent, political entities 48 when they passed from Confederation into Union. Theory has it, that these political entities were created by the people of each state. Not actively by all the people, we might add, but by those whose economic position command their participation. Less influential folks, the common people, though not actively participating in the formation of the states, nevertheless also played a part in their creation. Regardless of their motivation the truth is that if the common people had not given their support to the government that were established, it would have been impossible to maintain them. Thus qualified, I believe that the doctrine of democratic political theory that government owe their existence to the people and are empowered by them is acceptable even to the legal realist. 49

(Continuará)



# LA RELACION CONTRIBUTIVA ENTRE EL ELA Y LOS E. U.

Por: JUAN CORUJO COLLAZO



Juan Corujo Collazo B. B. A.

El sistema contributivo de todo país es una de las bases principales para el fomento y desarrollo de la industria, el comercio y la actividad económica en general. Este debe formularse con una clara visión de sus resultados totales para la economía del país. Así tenemos que cuando las riquezas y los niveles económicos de un país hayan logrado alcanzar un alto grado de progreso y estabilidad, la tendencia del gobierno sería la de rebajar las contribuciones para aliviar las cargas contributivas de sus ciudadanos.

En Puerto Rico, se paga dos tipos de contribuciones; las que imponen los municipios y las que impone el Estado Libre Asociado.

Los municipios imponen contribuciones sobre la propiedad y sobre algunos artículos de uso y consumo y actividades comerciales. Imponen además contribuciones sobre el volumen total de ventas de los negocios las cuales conocemos con el nombre de patentes.

La contribución sobre la propiedad se impone a base de dos tipos; uno que fija la legislación estatal y otro que fija la asamblea municipal en cada localidad. El tipo estatal es uniforme para toda la isla pero, los tipos municipales pueden variar de una localidad a otra, dependiendo del monto de la deuda del municipio y de la disposición de la asamblea municipal a hacer uso de esta contribución para costear los gastos generales que indica la ley.

El cobro de la contribución de la propiedad lo hace el Departamento de Hacienda a través de las colecturías de cada pueblo pero, devuelve a cada municipio la parte que se recauda por los tipos que este impone. Las contribuciones municipales producen una parte reducida de los ingresos contributivos del país, aproximadamente un once por ciento. Las principales con-

tribuciones que se pagan en Puerto Rico, son las que impone el gobierno estatal. Podemos enumerar entre ellas; las contribuciones sobre ingresos de individuos, corporaciones y sociedades; las contribuciones sobre la propiedad, herencias y donaciones; contribuciones sobre artículos de uso y consumo mejor conocidos con el nombre de arbitrios. Esto produce aproximadamente alrededor de un setenta y cinco por ciento a los ingresos del país.

Debo indicar que en Puerto Rico no se imponen arbitrios sobre los alimentos, ropas, zapatos, medicinas, muebles, aparatos de televisión ni sobre los servicios de gas, luz, agua o transportación.

En Puerto Rico, no se pagan contribuciones federales excepto los aranceles de aduanas cuyo producto, se revierte todos los años al Tesoro del Gobierno Estatal, las contribuciones sobre ingresos que se aplica a los empleados federales que prestan servicios en la isla y algunos impuestos de menor importancia.

En el caso de los empleados federales que prestan servicios en la isla, es bueno indicar que ellos pagan contribución sobre ingresos al Tesoro de Puerto Rico por el total de los ingresos devengados en la isla. El Gobierno Federal le concede tomar como crédito sobre la contribución a pagar al Tesoro Federal el total de la contribución pagada al Tesoro de Puerto Rico. Esto quiere decir que los empleados federales en Puerto Rico contribuyen principalmente al Tesoro de Puerto Rico y solamente vienen obligados a pagar al Tesoro Federal en el caso en que la contribución a pagar al Gobierno Federal sea mayor que la pagada al Gobierno de Puerto Rico. En este caso solamente ellos pagarían al Gobierno Federal la diferencia entre la contribución federal y la pagada en Puerto Rico.

Estas ventajas contributivas de que goza Puerto Rico sobre cualquiera de los cincuenta estados federados quedaron definidas al establecerse las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos mediante la aprobación de la ley número seiscientos.

La ley número seiscientos fué aprobada por el Octogésimo Primer Congreso de los Estados Unidos. Más tarde tomó la forma de un convenio al sancionarla los ciudadanos de Puerto Rico en un referéndum. Esta ley, al delinear

las condiciones de ciudadanía común y de unión económica que se establece entre los Estados Unidos y Puerto Rico, dispone lo siguiente en cuanto a las relaciones fiscales:

A- Las contribuciones que impone la Ley Federal de Rentas Internas que incluye principalmente las contribuciones sobre los ingresos de individuos y corporaciones, los impuestos sobre los artículos de uso y consumo y las contribuciones sobre herencias y donaciones, no tendrán vigencia en Puerto Rico. Las únicas excepciones son la contribución federal del seguro de vejez y para sobrevivientes (Social Security Tax) y la contribución federal sobre ingresos (Income Tax) en lo que afecta a los siguientes ingresos.

1. Los ingresos que reciben los residentes de Puerto Rico de fuentes radicadas en el extranjero.

2. Los ingresos que reciben no importa de que fuentes, el personal federal de servicios en Puerto Rico. (Esto aplica solamente a los militares y empleados civiles del gobierno federal que prestan servicios en la isla).

B- Se le devolverá al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las rentas provenientes de los aranceles de aduanas federales que se imponen sobre los artículos importados a Puerto Rico, de países extranjeros, así como las rentas provenientes de impuestos federales sobre los artículos que se producen en la isla para la venta en los Estados Unidos.

Nótese que Puerto Rico, no tiene que pagar contribuciones al tesoro federal a pesar de que recibe ayudas federales a través de los programas de ayuda federal en la misma forma en que lo reciben los Estados Federados de la Unión. Actualmente solamente dos de los programas federales no aplican a Puerto Rico, de igual manera que aplican a los demás estados Debo indicar que los Estados Federados tienen que pagar las contribuciones al gobierno Federal, por encima de las contribuciones que se pagan para el funcionamiento del gobierno del Estado y de los gobiernos de los municipios y distritos. Estas condiciones nunca han existido en Puerto Rico.

Esta posición privilegiada de la que disfruta Puerto Rico, dentro del sistema fiscal de los Estados Unidos, ha sido una de las principales causas para el desarrollo y progreso económico por el que

atraviesa la isla y el cual ha servido de ejemplo y estímulo a países de Asia, Africa, América Latina y algunas regiones de Europa.

El ritmo del progreso económico que lleva Puerto Rico, se refleja anualmente en el aumento del ingreso neto de la isla que ha sido de un seis por ciento anual. Esto representa ser dos veces mayor que el de los Estados Unidos que aumenta a razón de un tres por ciento anual.

Si Puerto Rico, dentro de su estructura política de Estado Libre Asociado, continúa el actual ritmo de progreso, llegará a alcanzar el nivel económico de los Estados Unidos, en un futuro no muy lejano. Entonces estará en condiciones de aportar al Tesoro Federal las correspondientes contribuciones sin que esto represente la ruina económica para la isla.

Puerto Rico no esta actualmente en condiciones de afrontar las altas cargas contributivas que pesan sobre cada uno de los Estados Federados. Ahora bien; ¿Que efectos produciría al desarrollo económico de la isla y a la economía en general si esta se convirtiera en estos momentos en el Estado 51 de los Estados Unidos?

(Continuará)

Se organiza asociación...

(Viene de la pág 1 col 2)

el 30 y 31 de enero para poder ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones.

2. Hacer campaña activa para reclutar el mayor número de estudiantes para la ADEPU.

3. Trabajar junto con la dirección central del Partido Popular Democrático para cooperar y asegurar el triunfo en las próximas elecciones.

4. Preparar universitarios para que sirvan de conferenciantes a la juventud puertorriqueña para orientarla debidamente en cuanto a la situación política actual.

5. Editar una revista mensual para repartirla gratis entre los estudiantes universitarios, y que contendrá artículos escritos por universitarios y colaboradores.

Luego se aprobó una moción de reconocimiento para el señor González Pató y la señora Helen de Costas, por la ayuda prestada y se acordó nombrarlos consejeros de la ADEPU para el 1960. Y con esto se dió por terminada la reunión.



## CRONICA DEL PROCER LUIS MUÑOZ RIVERA

### LA DEMOCRACIA

3 de septiembre de 1915

### DESDE WASHINGTON

#### JOVENES Y VIEJOS

Agosto 24, 1915

Leí en La Democracia dos editoriales que se titulan: "Hombres Viejos" y "Hombres Nuevos". En ambos se define el papel que corresponde a lo uno y a los otros en la vida pública. Unas líneas para decir mi impresión. Es esta. En un país como el nuestro es necesario que luche todo el que pueda luchar. Algún día nos constituiremos, al fin, sobre la base de un régimen liberal que permita a los ciudadanos puertorriqueños dirigir, ellos solos, los asuntos de Puerto Rico. Ese día será lícito el reposo: ahora no lo es.

Me parecen insensatas y hasta un poco pueriles las clasificaciones por edades. Cabe hacer clasificaciones; pero únicamente por aptitudes. Si un viejo debe ocupar el sitio que le señala su valer. Si vale mucho un joven, debe subir cuanto antes y mantenerse firme en la altura.

Prescindir del uno por la razón de sus muchos años, sería imbécil e inútil, porque la popularidad no es un rótulo, sino el producto de una acción continua y fecunda; es torbar al otro por la razón de sus pocos años, sería estúpido y necio, porque el mérito, si existe si no se funda en una farsa, vence todos los obstáculos y triunfa.

Es obvio que a las masas, que necesitan defensa contra los abusos de que son víctimas, conviene no disminuir el número de sus defensores. ¿Hay mil? Bien. Conservémoslos, estimulémoslos y procuremos aumentarlos. Mejor sería que hubiera dos mil o diez mil. ¿Aparece un leader? Bien. Estimulemos su entusiasmo para que sirva al pueblo - al pueblo; no al poder — confiémosle la autoridad, impongámosle la responsabilidad.

Por mi parte, desde veinte años atrás obedecí y obedezco a esa norma. A los combates periodísticos, cuando me agitaba sin descanso en Ponce-1890-1896-llamé para que compartieran conmigo la tarea y la gloria, a Mariano Abril, a Rodríguez Cabrero, a Eugenio Astol, a Evaristo Izcoa. Y cuando pasé a San Juan llamé a Rosendo Rivera, a Rafael Matos, exceptuando a Izcoa, los demás han sido directores de este diario que fundé para mantener ideales y no para acometer negocios.

En los combates políticos me rodeó una legión de muchachos brillantísimos como Cayetano Coll, Miguel Guerra, Santiago Vivaldi, Juan Huyke, Rafael Cuevas, Frank Martínez y cien-cien que no enumero para no ser profuso. El día en que nombré a Pepe Diego subsecretario de Gobernación contaría él apenas un cuarto de siglo.

Pero, al mismo tiempo, me acercaba en Barranquitas, en Ponce, en San Juan a los veteranos de alta ciencia y de profunda experiencia. Don Ramón Baldorioty, Don Pepe Acosta, don Pepe Celis, Salvador Brau, el Caribe, Fernández Juncos, fueron mis maestros, en la artes literarias o en los empeños cívicos. Les consulté a menudo y aproveche, o, a lo menos me propuse aprovechar sus enseñanzas. Siempre, siempre, les reconocí y al único que aún vive continúo reconociéndole una capacidad infinitamente superior a mi pobre capacidad de jíbaro de la montaña. Se dirá que yo entonces era un niño. No. Al iniciarme periodista había cumplido treinta y ocho. Y todavía a los cincuenta y cuatro, hace dos no más, iba a la casa de Brau para oírle, para aprender de su honradez y de su genio tantas cosas! Y aún hoy, si las dificultades arrecian, si los problemas son difíciles, ubo los cincuenta peldaños al mirador en que trabaja don Pancho Acuya y le pido, y el me da, sus sabios consejos. Porque todavía siendo tan viejo, no quiero atreverme a plantear ni a resolver, sin un dictamen de ese prestigio, asuntos que afecten al presente o al porvenir de mi patria.

Y yo pido a Dios, a la naturaleza, al destino, a las fuerzas dominadoras de los acontecimientos, que nos conserven la existencia de ese prócer ilustre, a quien no he visto equivocarse nunca y en cuyo criterio, y en cuya exacta visión a largas o a cortas distancias, tengo mayor fe que en la visión y en el criterio míos. Allí, en su bufete, entre sus libros, sereno, ecuanime, aquel anciano, sin escribir un artículo, sin pronunciar un discurso, prestó, presta y prestará a su isla más servicios que todos nosotros en la ardientes polémicas que tienen por campo la publicidad de la Prensa o la semipublicidad de la tribuna.

Y no porque me incline ante el juicio del patriarca y del patricio, deo de acudir al palenque donde libra sus batallas la juventud que se abre camino hacia la futuro. Ahí en la redacción, se reunía en marzo, abril y mayo un poderoso grupo de intelectos clarísimo. No

los menciono. ¿Acaso es posible olvidarlos o desconocerlos? Una veintena. Pero una veintena de cerebros que harían honor a Buenos Aires, a Montevideo, a Valparaíso.

El enorme producto de ideas y de formas que propaga una confederación de ensueños (1); el vibrante cronista pro-germano que acopia una erudición de maravilla (2); el bardo genial que canta en metros rotos y magníficos la canción de las Antillas (3); el desenfado inoclasta que labora una revolución moral y social con sus paliques de tremenda originalidad (4); el audaz mancebo, del alma de su tierra (5); el prosista de las filigramas, que esculpe su estilo, como si manejase, en vez de una pluma el cincel de Benvenuto Cellini (6); el poeta de los bronces heráldicos, que sin leer a Heredia, le hereda y sin leer a Richepín, le continúa (7); el humorista sutil que, al producir poco, por desgracia pone en sus cláusulas una suavidad sedante tra la cual se disimula una fuerza "frodoyante" (8); y, entre el resto del grupo, el publicista que es, en simultaneidad extraña, gran poeta, gran escritor, gran pensador, gran orador y que, siendo todo esto se recata en las penumbras indecisas antes que buscar los focos que bajo su inmensa claridad le destaquen y le presenten el aplauso (9).

Esa gente, "nuestra gente", me rodeaba en las noches de activo esfuerzo. Esos jóvenes lanzaban sus teorías, a menudo sus paradojas, a la disección tenaz y al análisis anatómico. ¿Cómo no admirarles si se les escucha? ¿Cómo no quererles si se les trata? Los jóvenes; la falange de jóvenes que ha subido ya a la cúspide. Tras sus huellas vienen los que ganan laureles en los concursos de arte; los que dan "el primer filo de sus armas" en las escaramuzas periodísticas; los que ejercen el ministerio de la propaganda en el comité y en el meeting; los que se preparan a escalar el repecho en cuyas cimas se extiende las ondas de la fama. Pienso que la edad no es un título ni tampoco un estigma. Pienso que a esta hora se dibujan las siluetas de los que van a constituir pronto un centro de acción tan noble y alto como el que, en 1880, constutían Baldorioty, Acosta, Celis, Blanco, Padiá, Corchado Brau, Córdova, Alonso, Ferrer, Elzaburu, Vizcarrondo; pienso que no llegarán los q. con mayor estrépito levanten o con mayor audacia empujen sino los que demuestren al pueblo

que quieren y saben servirles con desinterés patriótico.

No importa la edad; lo que importa es la capacidad, la energía, la discreción, y, más aún, la lealtad por encima de todo y la consecuencia con los principios, sin cambios, sin cortosiones, sin inconciencias: hoy en el sitio de ayer, mañana en el sitio de hoy, a fin de que el instinto popular, que es infalible, no pierda la confianza en el tesón y el caracter de sus leaders.

Antes de los treinta años, antes de los veinte se revelan en ocasiones los rasgos típicos de una precocidad privilegiada. Roma tuvo un cónsul de quince; César fué "imperator" a los veintiocho; Bonaparte fué dueño del mundo a los treinta y cuatro; Menéndez Pelayo penetró en la Academia a los veintiuno; Cavestany escribió "El Esclavo de su Culpa" a los diez y seis.

Después de los sesenta años, después de los setenta, pronuncia-ba Cicerón sus arengas más vibrantes; componía Victor Hugo sus celebres poemas; creaba von Bismarck la confederación germánica; planeaba Chamberlain el Imperio Británico; sorprendía Newton las leyes de gravitación universal; proclamaba Gladstone la autonomía de Islandia; liberaba Thies el territorio de Francia.

La edad no es un título ni un estigma. Por la edad no se sube ni se baja. Se sube por los servicios, por los sacrificios: se baja por las abdicaciones, por las traiciones. En el proceso de perpetua renovación que se cumple en el espacio y en el tiempo, la resta final queda a cargo de la muerte. Dejad que la muerte escoga.

#### FAIRFAX

(1) Se refiere a José de Diego. (2) Se refiere a Mariano Abril. (3) Se refiere a Luis Llorens Torres. (4) Se refiere a Nemesio Canales. (5) Se refiere a Cayetano Coll Cuchí. (6) (?). (7) Se refiere a Antonio Pérez Pierret. (8) Se refiere a Miguel Guerra Mondragón. (9) (?).

Esta crónica ha sido tomada de las Obras Completas de Luis Muñoz Rivera, Volumen III, Campañas Políticas. Seleccionadas y recopiladas por Luis Muñoz Marín, y publicadas en el 1925, por el Editorial Puerto Rico, Libertad, 23, Madrid España.